Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el “Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil”, suscrito en Santiago, República de Chile, el 5 de agosto de 2024.

Santiago, 22 de julio de 2025

M E N S A J E N° 076-373/

Honorable Senado:

**A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL H.
SENADO**

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el "Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil", suscrito en Santiago, República de Chile, el 5 de agosto de 2024.

I. ANTECEDENTES

El Tratado de Extradición con Brasil, cuyo fin principal es asegurar la acción eficaz de la justicia penal, nace de la necesidad de contar con un instrumento que modernice el marco jurídico aplicable entre ambas naciones y que reconozca las nuevas realidades delictuales. Asimismo, este instrumento internacional reemplazará el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos del Brasil y la República de Chile, suscrito en Río de Janeiro, el 8 de noviembre de

1935, el que ciertamente no se condice con las actuales realidades jurídicas de los dos Estados.

En líneas generales, el texto tiene un carácter modernizador y refleja las realidades normativas internas de ambas Partes, las cuales coinciden en algunos puntos y en otros presentan importantes diferencias.

En este orden de ideas, cabe destacar que se dará lugar a la extradición de los delitos que figuran en los tratados multilaterales vigentes entre ambos Estados. Asimismo, se incorporan causales facultativas de denegación de la petición de extradición, como es el caso de la comisión parcial de los hechos delictivos en el territorio de la Parte requerida (situación plausible en delitos cibernéticos).

Además, se otorga la posibilidad de remitir requerimientos directamente entre las autoridades centrales designadas por las Partes, se elimina el requisito de legalización y apostilla, se permite la transmisión digital de documentos y se consagra la facultad de entrega temporal de las personas extraditables, figura que no existe en el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, vigente entre ambos Estados, ni en el tratado bilateral de 1935.

II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL TRATADO

El Tratado se estructura sobre la base de un Preámbulo, donde constan los motivos por los cuales las Partes decidieron firmarlo, y 25 artículos, donde se despliegan las disposiciones que conforman su cuerpo principal.

En primer término, en el Preámbulo los Estados señalan las consideraciones que tuvieron presentes para celebrar el presente instrumento internacional, entre ellas, el deseo de hacer más efectivos los esfuerzos para combatir la impunidad y la necesidad de entablar

la más amplia cooperación para la extradición de delincuentes fugitivos en el exterior.

Seguidamente, el Artículo 1 establece, como principio general, el compromiso de las Partes a extraditar a las personas que se encuentren en su territorio nacional y sean buscadas por las autoridades judiciales de la Parte requirente, para ser sometidas a un proceso penal, juzgadas o para cumplir con una pena privativa de libertad impuesta por sentencia firme, por algún delito que dé lugar a la extradición.

A continuación, el Artículo 2, titulado “Delitos Extraditables”, consigna que la extradición se concederá en relación con delitos previstos en la legislación nacional de ambas Partes, aplicándose el principio de doble incriminación, punibles con pena de prisión u otra pena privativa de libertad por un período superior a dos (2) años.

En cuanto a las solicitudes para el cumplimiento de una pena de prisión u otra pena privativa de libertad, se concederá la extradición si al momento de presentarla el saldo de cumplimiento de pena por cumplir es, al menos, de seis (6) meses.

Agrega que un delito será extraditable sin importar el nombre ni las circunstancias accesorias que le asignen las distintas legislaciones nacionales.

Este artículo también contempla la posibilidad de presentar solicitudes de extradición concurrentes, pudiendo referirse a delitos diversos y conexos, bastando con que uno de los mismos satisfaga las exigencias de doble incriminación o penalidad mínima para que pueda concederse la extradición, inclusive con respecto de los otros delitos.

Igualmente, se contempla la posibilidad de presentar

solicitudes de extradición respecto de delitos comprendidos en los tratados multilaterales vigentes entre las Partes.

En cuanto a delitos fiscales, financieros, tributarios y cambiarios, indica que no se podrá denegar la extradición sobre la base de que la legislación nacional de la Parte Requerida contenga normas fiscales, aduaneras o de regulación cambiaria que difieran de la legislación nacional de la Parte Requirente, siempre que, además, se cumplan las demás condiciones del Tratado.

El Artículo 3, sobre “Denegación de la Extradición”, precisa las causales por las que el Estado Requerido no concederá la extradición, entre las que se señalan: la afectación a la soberanía, la seguridad nacional, al orden público o por ser contraria a su Constitución; por la sospecha fundada de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la sospecha fundada de que la solicitud se encuentra contaminada por consideraciones discriminatorias; la prescripción de la acción o de la pena.

Asimismo, la Parte Requerida denegará también la solicitud si la persona ha sido juzgada y sobreseída definitivamente o beneficiada con amnistía o indulto en la propia Parte Requerida; si se encuentra en situación de asilo o refugio; si el delito es de carácter estrictamente militar; o si el tribunal competente es de excepción o militar. Además, la extradición se negará cuando la sentencia haya sido dictada en ausencia sin que se cumplan las garantías señaladas para el caso, o cuando el delito sea de carácter político o conexo con delito de esa naturaleza.

El Artículo 4 se refiere a la situación de extradición de menores, replicando la norma vigente en el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. A este respecto, se repite la regla de no extraditar menores de dieciocho (18) años. Asimismo, impone al Estado Requerido la obligación de aplicar, conforme a su

ordenamiento jurídico, las medidas correctivas que se aplicarían si el delito hubiere sido cometido en su territorio por un menor inimputable.

Más adelante, el Artículo 5 regula la denegación facultativa de la extradición, estipulando las causales potestativas de denegación de la solicitud de extradición, cuya invocación quedará entregada a la ponderación de la autoridad competente del Estado Requerido.

A su turno, en el Artículo 6, titulado “Extradición de Nacionales”, se establece que la Parte Requerida podrá denegar la extradición de sus propios nacionales cuando su legislación interna lo prohíba expresamente. Si la extradición se rechaza por este motivo, la Parte requerida deberá -previa solicitud de la Parte Requirente- juzgar a la persona en su territorio o, en su caso, transferir la ejecución de la sentencia impuesta por la Parte Requirente.

En el Artículo 7, rotulado “Autoridades Centrales y Vías de Transmisión”, se prevé que la vía de transmisión de las solicitudes de extradición será preferentemente digital, a través de las Autoridades Centrales. También, podrán transmitirse por la vía diplomática y en forma física. En todos los casos, cualquier documento estará exento de cualquier trámite de certificación, legalización o apostilla.

Las Autoridades Centrales son, para la República de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y para la República Federativa de Brasil, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las que podrán ser cambiadas en cualquier momento, informando por la vía diplomática.

El Artículo 8 contempla la figura de la “Detención Preventiva”, herramienta que permite asegurar la comparecencia de la persona reclamada en el juicio de extradición y evitar una nueva fuga. En dicho artículo, se señalan los requisitos que debe cumplir una solicitud de este tipo y su procedimiento.

El Artículo 9, acerca de la “Solicitud de Extradición y Documentación Requerida”, el Artículo 10, sobre “Información Complementaria”, y el Artículo 11 referido a la “Decisión sobre la Solicitud de Extradición” establecen los requisitos que deben reunir las solicitudes de extradición, el mecanismo y plazo para subsanar las omisiones detectadas, y las reglas para su resolución.

En relación a la “Extradición Simplificada”, el Artículo 12 regula elementos procedimentales coincidentes con la legislación nacional, reconociendo la posibilidad de tramitar la extradición de forma abreviada (en concordancia con el artículo 454 del Código Procesal Penal).

El Artículo 13, titulado “Principio de Especialidad”, recoge un principio ampliamente aceptado, contenido en la mayoría de los tratados suscritos por Chile, que estatuye que la persona que hubiera sido entregada en extradición no será procesada, sentenciada o detenida ni sometida a ninguna otra forma de privación de libertad personal por la Parte Requirente por hechos distintos -y anteriores- a aquellos, a menos que operen algunas de las excepciones contempladas.

Desde el Artículo 14 al 21 se regulan los aspectos comunes a los tratados de extradición, tales como: Artículo 14, “Reextradición a un Tercer Estado”; Artículo 15, “Concurso de Solicitudes”; Artículo 16, “Entrega de Personas Extraditadas”; Artículo 17, “Entrega Diferida”; Artículo 18, “Entrega Temporal”; Artículo 19, “Incautación y Entrega de Bienes”; Artículo 20, “Tránsito”; y el Artículo 21, “Costos”.

El Artículo 22 explicita que el presente acuerdo no afecta los derechos y obligaciones que las Partes hubieren asumido en cualquier otro Tratado Internacional que les sean aplicables. En concordancia, el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur,

la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998, seguirá igualmente vigente entre ambos Estados.

A su turno, el Artículo 23 se refiere al escenario de evasión, estableciendo que la persona extraditada que, luego de ser entregada a la Parte Requiriente, escapare a la acción de la justicia y regresare a la Parte Requerida, será detenida a solicitud de las Autoridades Centrales, y entregada nuevamente sin más trámites, de conformidad con su legislación nacional.

Por último, los Artículos 24 y 25 contienen las cláusulas finales, usuales en los instrumentos internacionales, tales como: consulta y solución de controversias, enmiendas, entrada en vigor, esto es, treinta (30) días después de la fecha de la última notificación mediante la cual las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus respectivos requisitos legales internos para su entrada en vigor, y terminación del Tratado.

En este sentido, el Tratado solo se aplicará a los delitos cometidos a partir de su entrada en vigor y no afectará hechos anteriores.

En mérito de lo expuesto someto a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO :

ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el "Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil", suscrito en Santiago, República de Chile, el 5 de agosto de 2024.

Dios guarde a V.E.,

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

ALBERT VAN KLAVEREN STORK

Ministro de Relaciones Exteriores

JAIME GAJARDO FALCÓN

Ministro de Justicia
y Derechos Humanos